

# Europa y la crisis económica de América Latina

GEORGES D. LANDAU\*

## INTRODUCCIÓN

Vivimos un momento de perplejidad en las relaciones económicas internacionales, y de transición en las relaciones políticas. Los futuros historiadores encontrarán alguna dificultad para clasificar este último cuarto del siglo XX. Las teorías de las ciencias económicas y políticas clásicas confrontan una realidad que las desafía y que se rehúsa a ajustarse a ellas. Con tal trasfondo, ¿cómo enmarcar las relaciones entre América Latina<sup>1</sup> y Europa, sociedades integrantes de la misma cultura y, sin embargo, separadas en esta época de crisis por mucho más que un océano?

América Latina se halla en la encrucijada de varios enfrentamientos históricos. Por una parte la antigua dicotomía ideológica Este-Oeste, que sería prematuro considerar superada y que diariamente entraña consecuencias dramáticas para la región en Cen-

troamérica y el Caribe; por otra, la confrontación histórica entre el Norte y el Sur, de no menos influencia actual en los destinos de la humanidad entera, a pesar de ser geográficamente imprecisa. En Europa se entiende que América Latina forma parte del llamado Tercer Mundo, es decir, del bloque de los 77 países pobres, cuyo número ya asciende al doble; sin embargo, en un sentido cultural amplió estamos en realidad mucho más cerca del Primer Mundo, de las sociedades modernas e industriales cuyos valores los comparte la región, que del Tercero. Lo demás es pura retórica.

Aquí cabría quizá preguntar ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es Europa? Y ¿qué es América Latina? Es más fácil contestar a la primera pregunta, cuya definición geográfica es obvia. Pero, para ceñirnos a Europa Occidental, se habla de la Europa de los Seis (los fundadores originales de la Comunidad Europea), de los Siete (los actuales miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, la AELC), de los Diez (la actual Comunidad), de los Doce (la Comunidad ampliada mediante el ingreso, presumiblemente en 1986, de España y Portugal), y hasta de los Quince (el número de países miembros del Consejo de Europa). De todos estos foros, el que más importancia tiene, para América Latina y para el mundo, es la Comunidad Económica Europea. En efecto, la CEE, con sus 272 millones de habitantes, cuyo ingreso per cápita es de casi 6 900 dólares, tiene más de 20% del producto nacional bruto mundial, más de 31% de las reservas monetarias, más

1. Para efectos de este trabajo se entenderá que la región latinoamericana comprende al Caribe.

\* Representante Especial Alternativo del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa. Las opiniones expresadas en este texto son estrictamente personales.

de 35% del comercio mundial, y es responsable de más de 38% de la asistencia oficial destinada a países en desarrollo.<sup>2</sup> En resumen, la CEE constituye, con su PIB de 1 870 000 millones de dólares, el más poderoso bloque económico, pese a que varios países de América Latina considerados individualmente, tengan un PIB superior al de varios de los principales miembros de la Comunidad. Sería posible, por tanto, sucumbir a la tentación de identificar la CEE con Europa, pero en realidad hay que agregarle la dimensión económica de la AELC y otros países.

#### EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA

Es muy difícil definir a América Latina como algo más que una expresión geográfica. Parafraseando lo que alguna vez se dijo sobre la relación entre Inglaterra y Estados Unidos, los países hispanoamericanos son repúblicas hermanas separadas por un idioma común. En realidad, América Latina constituye un archipiélago cuyas islas componentes están divididas por caudales muchas veces impasables; son herederas, es cierto, de una cultura común, pero al propio tiempo son muy heterogéneas y hasta esa cultura común es cuestionable. Además, en la medida en que los países latinoamericanos hayan desarrollado idiosincrasias propias, perfiles de un temperamento nacional, un folclor peculiar, concepciones y perspectivas netamente definidas, el concepto de archipiélago se hace aún más evidente, y con él las tensiones entre las repúblicas hermanas.

Si esto es efectivamente así, si América Latina es un caleidoscopio de naciones, muchas de las cuales siguen imperfectamente integradas aun en el ámbito interno, separadas por intereses a veces mutuamente excluyentes, ¿todavía cabría hablar de una verdadera identidad latinoamericana? La respuesta es inequívocamente afirmativa. Además de ser la integración regional una vocación institucionalizada del Sistema Interamericano, por encima de las disensiones nacionales, este continente nuestro se inserta en el marco de la cultura latina como parámetro mayor, y en un sistema cultural de valores heredado de la península ibérica; en el cual el catolicismo sobresale como condicionante histórico, el derecho romano como fuerza normativa y el reconocimiento de la ética occidental, de raíz judeo-cristiana, como elemento filosófico aglutinador de la sociedad: su gran catalizador de coalescencia.

Más que un conjunto de reglas coactivas, el Sistema Interamericano consiste en una estructura de valores compartidos, cuya gran debilidad —la necesidad de consenso— es también su mayor virtud. La ocasional opción por la violencia como forma de alternancia del poder en el ámbito interno y de solución de controversias en el externo, no obsta a que los valores inherentes del Sistema se consoliden gradual y progresivamente sobre la base de una solidaridad difusa, insuficiente todavía para provocar una actitud unívoca en los foros internacionales, pero sí bastante para promover un acercamiento de los miembros del grupo, por encima de sus eventuales discrepancias intrínsecas, *erga omnes*. Y llegamos a esta paradoja, la de que la individualidad quizá exagerada de los países latinos favorece la realización de su identidad y de la conciencia de ella, puesto que ese mismo individualismo

es un legado ibérico, parte integral del carácter latino, factor inherente a la identidad latinoamericana.

Sin embargo, la realidad de hoy es que América Latina es una región en búsqueda pirandelliana de su identidad, sin haberla encontrado aún. La identidad señalada es por tanto virtual más que real. Algunas de las islas del archipiélago, que al fin y al cabo es de formación reciente, están todavía en la etapa del paroxismo nacional, del predominio del perímetro propio sobre el de la región, posición quizás miope pero perfectamente comprensible en determinada etapa de la evolución histórica de los pueblos, siempre y cuando provoque la integración vertical, hacia adentro, y evolutiva más que revolucionaria.

Por varias razones, otros países, en ese continente en llamas que es la América Latina de nuestros días, confrontan la crisis de la legitimidad de su poder interno y con tal motivo se hallan sólo residualmente vinculados a los intereses comunes de la región. Existe aún la dicotomía de intereses entre países grandes y pequeños y entre aquellos cuya vocación económica los hizo asumir una posición extrovertida hacia los mercados mundiales de comercio, capital y tecnología, y aquellos que, al contrario, permanecen relativamente aislados, dentro de un microcontexto a veces de tendencia autárquica. Hay países propugnadores de la integración regional que en nombre de ella hicieron concesiones más o menos retóricas hasta que ellas chocaron con el pragmatismo económico, que los hizo estancarse, si no retroceder, y hay otros, quizá más prudentes, que jamás se adhirieron a tales mecanismos de integración.

El entusiasmo de los años sesenta por la integración económica, estimulado por los pioneros del movimiento europeísta como Monnet, Schumann y Adenauer, llevó a los líderes latinoamericanos de ese entonces a adoptar modelos análogos a los europeos con miras a la creación de un mercado común latinoamericano que debería concretarse en 1985, pero la realidad actual de la Comunidad Europea demuestra que es necesario bastante más que el simple intercambio de concesiones tecnocráticas para que una mera unión aduanera evolucione hacia una verdadera unión política y económica. Lo que en realidad hace falta, tanto en Europa como en América Latina, es una voluntad política subyacente, inequívoca y positivamente afirmada, de lograr una genuina convergencia de intereses en demanda del bien común. En esencia, hace falta una vocación de sinergia, sin la cual las identidades regionales se quedan virtuales y opacas.

De aceptarse este planteamiento, es posible establecer entonces una relación entre la identidad latinoamericana y su sinergia, es decir, el concepto de que el todo vale más que la suma algebraica de sus componentes, a lo cual cumple sin embargo agregar otro requisito esencial, a saber, la conciencia de este hecho, la volición del sinergismo. Mientras nuestros países sigan dispersando sus esfuerzos sin la conciencia del valor prorratea de la sinergia, la identidad latinoamericana no pasará de una meta histórica que habrá de lograrse en algún futuro incierto y desconocido, puesto que las distintas naciones de la región, balcanizadas si no finlandizadas, y sobre todo ignorantes del proceso del que constituyen piezas integrantes, seguirán buscando un autor, o mejor dicho, un mentor. La identidad regional es sin embargo factible. Se requiere para ello remplazar las tendencias centrífugas de las acciones nacionales por otras centrípetas, y una dependencia casi freudiana en relación con eventuales socios mayoritarios o multipolares por una conciencia, una voluntad, una plenitud de ac-

2. Cifras de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) correspondientes a 1982.

ciones convergentes hacia la identidad individual y colectiva de la nacionalidad latinoamericana.

#### LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA

La presente crisis —la peor de los últimos cuarenta años— amenaza el progreso económico y social alcanzado por la región durante los últimos dos decenios. Además, pone en peligro el sistema todavía frágil de instituciones y procesos democráticos que se desarrollaron y consolidaron en época reciente. Corresponde por tanto a los amigos de América Latina en la comunidad internacional, y nombradamente en Europa, adoptar las medidas y políticas susceptibles de cooperar con la región para solucionar sus problemas críticos e impulsarla rumbo a la recuperación de niveles adecuados de crecimiento económico y de bienestar social.

La evidencia de la crisis es dramática. Luego de dos decenios de acelerado crecimiento económico, a un promedio anual de casi 6% en términos reales, la economía latinoamericana se paralizó virtualmente en 1981 y declinó en el bienio siguiente. El ingreso per cápita bajó casi 10% desde 1980. La recesión económica verificada desde el segundo choque petrolero en los países industrializados, es decir, desde 1979, tuvo profundos efectos en América Latina, pero sólo se hizo patente a los ojos del mundo en agosto de 1982, cuando la comunidad financiera se sobresaltó con la noticia de que México, una potencia petrolera, no tenía la capacidad de asegurar el servicio de su deuda externa. Los ingresos por concepto de exportaciones disminuyeron en proporción semejante comparados con los de 1981. Durante el mismo período, sin embargo, se ha duplicado el endeudamiento externo de la región, alcanzando la cifra de 350 000 millones de dólares, y el pago de los intereses ha subido a un ritmo vertiginoso hasta llegar a los 40 000 millones de dólares en 1983, con lo cual absorbieron nada menos que 35% del ingreso total por concepto de las exportaciones latinoamericanas.

Desde 1981 nada menos que 16 de los 28 países latinoamericanos miembros del FMI pidieron ayuda de emergencia a éste para superar sus agobiantes problemas de balanza de pagos. Desde 1980, la tasa de utilización del capital productivo de la región declinó 13%. Por tercer año consecutivo, 1983 fue de estancamiento o declinación del PIB en la región, el cual se redujo en ese momento al mismo nivel de 1976, al propio tiempo que el aumento demográfico proseguía a una tasa anual de 2.2% y el incremento de la población activa a una de 3%, con la consiguiente presión sobre la demanda de empleos. El servicio de la deuda externa absorbe en ciertos países hasta 25% del PIB.<sup>3</sup> Los efectos de la crisis en la región se reflejaron no sólo en su comercio exterior extrahemisférico, sino incluso en el intrarregional; en el caso de Brasil, por ejemplo, sus exportaciones hacia los demás países de América Latina sufrieron una caída drástica en función de la reducción de las importaciones por parte de éstos.

Los efectos de este proceso y de las severas medidas de ajuste puestas en práctica por la mayoría de los países de la región en un esfuerzo por corregir los desequilibrios en sus respectivas balanzas de pagos, han sido de largo alcance. En todos estos países se ha verificado un abrupto deterioro de las condiciones de vida

de la población, que ha afectado en forma particularmente contundente a los sectores sociales no privilegiados, lo cual ha ocasionado una dramática intensificación de las tensiones sociales y políticas. Estas tensiones están llegando a amenazar, en ciertos países, la viabilidad de las instituciones y de los procesos democráticos aún jóvenes de América Latina, que durante los últimos años habían conocido una verdadera revitalización en muchos países.

En tales circunstancias, los vínculos históricos de Europa con América Latina revisten un significado especial. Merced a ellos, una verdadera convergencia de intereses se fue desarrollando a lo largo de los años y podrá llegar a ser extremadamente útil al facilitar la consecución de las iniciativas y de los ajustes especiales requeridos por el suministro de un apoyo eficaz a la recuperación de América Latina. En realidad, aplíquese el concepto de interdependencia con particular acuidad a la definición de la relación Europa-América Latina.

#### CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUROPA

Al ensayar una definición de los medios y métodos mediante los cuales Europa podrá querer prevalecerse de la compleja interacción de sus relaciones sociales, culturales, políticas y económicas con América Latina, con miras a lograr una mayor eficacia de su asistencia a la región, sería oportuno examinar el alcance de los actuales vínculos económicos de una con otra, y luego analizar las necesidades más apremiantes de nuestro continente.

Sólo ahora, al emerger muy lentamente de una recesión económica mundial, empezamos a entender el alcance de las lecciones del decenio de los setenta, cuya enseñanza fundamental es la efectiva interdependencia de las economías. Una de estas lecciones, derivada del análisis de las transferencias de recursos reales hacia los países en vías de desarrollo, es la de que si bien el capital sigue siendo el motor del crecimiento económico, los procesos de utilización del mismo, ya sea el movilizado mediante el ahorro interno o el importado, revisten análoga importancia. El concepto de interdependencia, aplicado en este contexto, significa la necesidad de una armoniosa concertación de políticas tanto por parte de los países tradicionalmente exportadores de capital como de los que lo importan, para que la utilización de ese recurso tenga efectos óptimos, en beneficio común de unos y otros.

En la medida en que Europa se da cuenta de la problemática inherente al proceso de desarrollo de América Latina (como en la cuestión de la deuda y de la austeridad, endógena o exógena, que se impone a las naciones de la región para poder rescatarla), la percepción es diagnóstica —hay una conciencia difusa de las posibles repercusiones político-sociales de esa realidad— pero nunca terapéutica. Esto es, se trata de un problema que atemoriza a Europa, y con razón, pero al mismo tiempo se rechaza la idea de que ella pudiera tener una parcela de responsabilidad siquiera en su génesis, para no hablar de su solución. La presión demográfica, la demanda de empleo, acentúan la crisis interna europea y con ello las tendencias proteccionistas que ganan vigencia a ritmo alarmante. Lo que no hay es un sentimiento de que a Europa se le reserva un papel importante en la solución de tales problemas. Y, sin embargo, Europa puede desempeñar ese papel. Los países europeos se incluyen entre los que acumu-

3. Datos tomados de Banco Mundial, *Rapport sur le développement dans le monde, 1984*, Washington, julio de 1984, pp. 32-37.

lan la doble condición de importantes acreedores financieros y mercados de exportación para los de América Latina, en varios casos, los principales, en una y otra categoría para el mismo país. Al mismo tiempo, están entre los miembros preeminentes de organismos como el FMI, el Banco Mundial y el GATT, además de la función que cumplen en el BID. Si en los foros de la OCDE, en las reuniones cumbre anuales de los "Siete" (siendo el séptimo la CEE) y en las reuniones también a nivel de jefes de Estado o de Gobierno del Consejo Europeo de las Comunidades se lograra un consenso político en cuanto a que las medidas de asistencia económica a América Latina son ya impostergables y tanto o más importantes para la mancomunidad política occidental que las de ayuda humanitaria a África, debería producirse una compatibilización, aún faltante, entre las políticas bilateral y multilateral de los países europeos hacia América Latina, así como de las políticas comercial y financiera, que están íntimamente vinculadas, por ejemplo cuando en el GATT y en el FMI se examinan, con enfoques distintos pero con objetivos en último análisis idénticos, las dificultades a las que se enfrentan los países latinoamericanos para superar su actual crisis de endeudamiento y proteccionismo.

La recuperación de la economía latinoamericana en su conjunto depende esencialmente de dos factores, y no sólo ambos involucran el sector externo sino que Europa tiene en los dos un papel destacado: el primero se refiere a una recuperación sostenida de la economía en las naciones industrializadas, que conduzcan a su vez a la expansión y a la liberación del comercio internacional; el segundo factor atañe al repunte del flujo de inversiones externas hacia América Latina. La recuperación en los países de la OCDE no entraña automáticamente una mejora correspondiente en las exportaciones latinoamericanas (o en las inversiones de capitales foráneos en la región); para esto tendría que ir acompañada de una política concertada de desgravación comercial y de promoción de las exportaciones latinoamericanas hacia Europa, así como de las inversiones correspondientes.

Europa en su conjunto representa 26% de las importaciones de América Latina y 28.4% de sus exportaciones. En los últimos decenios, los bancos y las empresas industriales de Europa han extendido considerablemente sus negocios, incluyendo las inversiones directas, en muchos de los países latinoamericanos, y los bancos europeos son acreedores de una parcela importante de la deuda externa de la región. Por tanto la solución favorable de la problemática económica y financiera latinoamericana reviste gran trascendencia para Europa, con base en una mutualidad de intereses convergentes.

Sin menoscabar la importancia del capital como agente de promoción del desarrollo, los países de ingresos medios de América Latina sienten una necesidad quizá aún más grande de tecnología compatible con los respectivos patrimonios económicos. Europa, cuna de la Revolución industrial, posee una riqueza enorme en términos de soluciones tecnológicas acumuladas para muchos de los problemas que agobian a las sociedades en desarrollo. Tanto por conducto de sus esfuerzos bilaterales de ayuda como gracias a la intermediación de instituciones multilaterales que hacen convergir hacia las necesidades específicas del desarrollo latinoamericano los recursos así del Norte como del Sur, las naciones europeas pueden aplicar su acervo tecnológico a los programas y proyectos que objetivan el fomento de la región.

El suministro masivo e institucionalizado de tecnología, la mayor parte de la cual se concentra en el dominio del sector privado,

sería una relevante contribución europea al desarrollo de América Latina.

Hay otros importantes medios por los cuales Europa puede participar en ese desarrollo en escala aún mayor que la actual, por ser materia de su propio interés. Véase la cuestión del comercio exterior: si se tiene presente que las importaciones latinoamericanas declinaron 8% en 1982 como resultado de la crisis, y que se proyecta una reducción ulterior del orden de 22% hasta fines del corriente año, en función de las medidas de ajuste requeridas por la conservación de los escasos recursos en divisas necesarios para amortizar la deuda externa, es evidentemente de interés para Europa, en calidad de importante proveedora de la región de bienes de capital y de servicios tecnológicos avanzados, el reequilibrio de la balanza comercial mediante el incremento de sus exportaciones destinadas a América Latina.

Sin embargo, esto sólo será factible si Europa lograra hacer dos cosas: primero, liberar suficientemente su comercio de importación, haciendo posible de esa manera el acceso a los mercados europeos de las manufacturas latinoamericanas, así como los productos básicos, con lo cual se generaría un volumen de divisas suficiente para sostener el nivel de las importaciones de origen europeo. Y, segundo, financiar sus envíos a la región a través de créditos a la exportación, los cuales, mediante distintas modalidades de cofinanciamiento, podrían, en el caso de los bienes de capital, contribuir sensiblemente al crecimiento económico de América Latina.

No obstante, los efectos conjuntos de la recesión y del desempleo generalizado en Europa han estimulado el resurgimiento del proteccionismo y de restricciones comerciales que cercenan aún más tal acceso, en el preciso momento en que las naciones latinoamericanas necesitan ampliar y diversificar más que nunca sus exportaciones hacia el mundo industrializado. El mantenimiento de las importaciones latinoamericanas reviste trascendencia también en esto, dado que su disminución ya ocasionó una caída considerable, del orden de 13%, en la tasa regional de formación de capital fijo, indispensable para el crecimiento económico y, por ende, para el proceso de desarrollo.

Además de la liberación del comercio, por tanto, debería Europa, en su propio interés a largo plazo, estimular el flujo de inversiones privadas directas hacia la región, aprovechando su extraordinario arsenal de recursos naturales, así como el dinamismo de su mercado interno, que hasta el final de este siglo comprenderá una población de 550 millones, predominantemente urbana en su composición, es decir, un mercado sumamente atractivo.

Durante los dos últimos años se dieron pasos iniciales significativos con miras a paliar la crisis del endeudamiento, combinada con la de las balanzas de pagos de los países latinoamericanos. Las acciones del FMI encaminadas a consolidar la posición de liquidez de varios países con un nivel mediano de ingresos, así como la reprogramación de las deudas con ciertos bancos comerciales, en buena medida europeos, se incluyen en esta categoría. Si bien son alentadoras, estas operaciones de emergencia constituyen medidas esencialmente transitorias y no pueden resolver los problemas de largo plazo a cuya solución se dirigen.

En todo caso, lo que se requiere es que las naciones industriales evolucionen más allá de las operaciones paliativas, de socorros de emergencia, y traten de confrontar los problemas estructurales más graves que se hallan en la raíz del binomio deuda-exporta-

ciones en América Latina. Es ésta una tarea difícil por cuanto exigirá la adaptación de los actuales sistemas de cooperación comercial y financiera, y también la adopción de políticas nacionales más coherentes que se refuercen mutuamente, tanto por parte de los deudores como de los acreedores, en áreas tales como las de comercio exterior, tipos de cambio, tasas de interés, política monetaria, finanzas públicas, productos básicos y energía.

A pesar de las dificultades reales para adoptar enfoques sistémicos para formular y ejecutar la política económica internacional en forma global y totalizadora, es imperativo que se pongan en práctica tales medidas convergentes si es que se quiere asegurar la recuperación completa de la economía mundial y engendrar una nueva fase de su crecimiento. Para América Latina, semejante evolución debiera resultar, en primer término, en la reactivación de sus procesos productivos; en segundo lugar, en la reestructuración de su deuda externa de manera que sus términos y condiciones se ajusten a la situación peculiar de cada país y a la capacidad de amortización respectiva y, en tercer lugar, en la revigorización del proceso de mejora de la infraestructura productiva y de los sectores sociales de la región.

El primero de estos tres objetivos requiere la elevación creciente del nivel de las exportaciones latinoamericanas, así como del flujo de créditos destinados al financiamiento de las importaciones necesarias de repuestos, de componentes de producción y de nuevas tecnologías. El primero de estos desideratos parece estar a punto de realizarse, puesto que los ministros de los países miembros de la OCDE, en su reunión de la primavera de 1983, acordaron que las condiciones favorables propiciadas por la recuperación económica debieran aprovecharse para invertir las tendencias proteccionistas en las naciones industrializadas y liberar el comercio internacional. En el ámbito del GATT se ha accionado un amplio programa de trabajo en este sentido y una parcela considerable de ese programa se ocupa de las medidas de política tendientes al incremento de las exportaciones de los países deudores hacia los de la OCDE. En la perspectiva de los ministros de la OCDE semejante incremento debiera promover un mayor crecimiento, menor inflación y una expansión del empleo, en los países de la OCDE y en los demás.

El segundo requisito, relativo a un aumento en el flujo de créditos comerciales extendidos a América Latina, podría satisfacerse de varias maneras. En fuentes de la OCDE se estimó, por ejemplo, que una recuperación porcentual de un solo punto del PIB en los países industriales, libre de cualquier medida proteccionista, generaría 11 000 millones de dólares de exportaciones adicionales de los países en desarrollo no exportadores de petróleo. En forma análoga, una reducción de 1% en las tasas de interés prevalecientes en los mercados financieros haría bajar los pagos por concepto de intereses de dichos países en cerca de 4 000 millones de dólares.

Si, en cualquiera de estas áreas, la reducción porcentual fuese de dos puntos, ello liberaría recursos adicionales del orden de 30 000 millones de dólares. Una proporción muy importante de este ahorro en términos de intereses y de ganancias por concepto de exportaciones correspondería a los países de América Latina, que representan cerca de una tercera parte de las exportaciones de los países en desarrollo no exportadores de petróleo y poco más de la mitad de la deuda total del mundo en vías de desarrollo. El incremento de liquidez resultante podría contribuir en forma

significativa a dinamizar la producción latinoamericana y a que se recuperara la actividad económica general en la región.

La reestructuración de la deuda externa de América Latina constituye un objetivo de la mayor prioridad. Actualmente el servicio de esa deuda grava en forma extremadamente pesada a las naciones de la región, llegando a hipotecar más de una tercera parte de sus ingresos por concepto de exportaciones. Este solo hecho deja un margen muy exiguo para financiar las importaciones requeridas por el proceso productivo de la región, o para cualesquiera incrementos en las inversiones requeridas por su infraestructura productiva. Pese a que ninguno de los países latinoamericanos haya postulado la pura y simple abrogación de sus compromisos externos, tampoco existe, salvo pocas y dudosas excepciones, la capacidad de afrontar por plazos más dilatados sus actuales niveles de servicio de la deuda.

La reestructuración de la deuda a corto plazo, acompañada de altas tasas de interés, de comisiones y de márgenes diferenciales, únicamente dio una apariencia cosmética de mitigación del problema real, sin haberlo resuelto de hecho. Se necesita con urgencia un conjunto de medidas básicas de ajuste a largo plazo en la estructura y en el costo de la deuda externa latinoamericana, siempre que tales ajustes sean apropiados a la situación particular de cada país y a la capacidad respectiva de amortización de la deuda.

En el Consenso de Cartagena, aprobado el 22 de junio de 1984, los cancilleres y ministros responsables del área financiera de once países latinoamericanos (incluso los cuatro "grandes"),<sup>4</sup> ratificando iniciativas anteriores como la Declaración de Quito, recogieron algunos conceptos esenciales para comprender la concepción latinoamericana de la crisis, tal como que ésta obedeció en buena medida a factores externos ajenos al control de los países de América Latina. Ya poco antes, el 19 de mayo del año pasado, los presidentes de cuatro países<sup>5</sup> habían adoptado una declaración sobre el tema, la que fue transmitida a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Londres para la reunión cumbre del 7 al 9 de junio de 1984. Dicha declaración contenía un llamado a la comunidad internacional en el sentido de abordar de manera integrada y coherente los problemas de la economía mundial, sobre todo los relativos al endeudamiento, debido a las interrelaciones de las economías agrupadas en la OCDE y las del Grupo de los 77.

En sus propuestas, retomadas en Cartagena, y que en uno y otro caso tuvieron un tono sumamente sobrio y desapasionado, los países latinoamericanos, luego de reiterar su decisión de "cumplir con los compromisos derivados de su endeudamiento externo y la determinación de proseguir con los esfuerzos de reordenamiento monetario, fiscal y cambiario de sus economías, para la reanudación del desarrollo económico", al postular la revisión entre otros de los criterios de condicionalidad del FMI, hicieron hincapié en el reconocimiento de la interdependencia de los países industrializados y los en desarrollo, lo que consta expresamente en el Comunicado de Londres, y se mostraron favorables al mantenimiento del diálogo entre estas partes en el ámbito del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

4. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El documento puede consultarse en *Comercio Exterior*, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, pp. 632-635. N. de la R.

5. Argentina, Brasil, Colombia y México. N. de la R.

La restauración del crecimiento de la base productiva de América Latina, de su infraestructura física y la elevación de los niveles de bienestar social de la región habrá de resultar en un aumento de las tasas de ahorro internas y de los flujos de capitales externos, en la forma ya sea de inversiones directas o de préstamos a largo plazo para programas y proyectos con miras al desarrollo económico y social. Las ingentes necesidades de América Latina en este campo se evidencian con la caída dramática del crédito internacional otorgado a la región. De 1981 a 1983, las corrientes líquidas de capital destinado a América Latina bajaron de 38 000 millones de dólares a 5 000 millones. Al mismo tiempo, el capital transferido hacia afuera de la región, por concepto de pago de intereses sobre la deuda o de remesas de utilidades líquidas aumentó de 19 000 millones de dólares en 1980 a 34 000 millones en 1983, produciéndose en consecuencia una brecha en la transferencia de recursos reales del orden de casi 50 000 millones de dólares durante esos dos años, con lo cual América Latina se transformó en exportadora neta de capitales justamente durante el período más crítico de su adversidad económica.

Como protagonista preeminente en los mercados financieros mundiales, Europa tiene un interés especial en la restauración de la salud financiera de América Latina. Un prerrequisito para lograrla consiste en el reconocimiento de la respuesta valerosa que dio la región al reto de las políticas de ajuste por la crisis del endeudamiento, y en la moderación ante la tentación de medidas de cartelización más radicales. A mayor interdependencia en el campo comercial corresponde una disposición más favorable a la cooperación legítima en la esfera de las finanzas internacionales. Tal cooperación debiera abocarse en particular a la recuperación del proceso de crecimiento económico de la región, cuando menos para evitar que el progreso penosamente alcanzado a lo largo de varios decenios, gracias mayormente a un tenaz esfuerzo de autoayuda, sea neutralizado por las presiones, tanto económicas como sociales, resultantes de una carga intolerable de endeudamiento externo.

En efecto, los esfuerzos heroicos de varios países latinoamericanos por generar excedentes en las balanzas comerciales respectivas están siendo anulados por la tiranía de los incrementos en el servicio de esta deuda. Lo que se requiere ahora es la voluntad política, tanto por parte de las naciones industrializadas como de las que están en vías de desarrollo, de reformular en profundidad la cooperación financiera internacional con imaginación y creatividad, con el objeto de invertir la fuga de reservas y volver a estimular los flujos, así de inversiones privadas directas como de créditos a mediano plazo, para financiar la exportación de bienes de capital de los países miembros de la OCDE hacia los de América Latina, haciendo hincapié en las inversiones productivas pero sin sacrificar los grandes avances ya realizados por la región rumbo a su desarrollo social.

#### CONTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES

Como se puso de manifiesto más arriba, para que sea efectiva una estrategia europea de asistencia a América Latina para sacarla de su actual crisis económica, en el supuesto de que exista tal estrategia por parte de los países de la OCDE, y de Europa en particular, es necesario que las políticas destinadas a su aplicación sean concertadas tanto en el plano bilateral como en el multilateral. En este último caso, corresponde examinar cuál podría ser

la contribución potencial de los organismos multilaterales a la solución de la crisis.

Cuando se considera específicamente lo que pueden hacer los organismos internacionales, con el beneplácito y hasta la activa participación de Europa, en pro de las reivindicaciones latinoamericanas, es necesario clasificar la actuación de dichos organismos en dos niveles: el conceptual, o sea, de formulación de políticas, y el de intervenciones de tipo operativo. En el primer campo se incluyen las iniciativas tendientes a revitalizar las instituciones financieras del sistema de Bretton Woods, puesto que las existentes —el FMI y el Grupo del Banco Mundial— tienen omisiones en cuanto a ciertos problemas como los desajustes estructurales, es decir, a largo plazo, en las balanzas de pagos, fenómeno que no se anticipaba hace cuarenta años, cuando se establecieron aquellas instituciones.

En Bretton Woods se estimó que las crisis de balanzas de pagos serían de corta duración, requiriéndose de una acción meramente paliativa del FMI, pero obviamente ya no es así. Los países de América Latina, fundamentalmente afectados por una crisis de esta índole, desearían que se reformulara el sistema financiero mundial a fin de tener en cuenta estas nuevas necesidades. En la reunión cumbre de 1983 en Rambouillet, Francia, propusieron tal reformulación en profundidad, pero no hubo consenso al respecto y nada se hizo. En seguida se examinaron otras propuestas,<sup>6</sup> pero tampoco se pudo superar las resistencias de ciertos países industrializados, varios europeos entre ellos.

En cuanto a las intervenciones operativas, es forzoso reconocer que la dinámica de la actual crisis de los países en desarrollo, que es particularmente aguda en América Latina, engendra nuevas necesidades, reflejadas en procedimientos operativos más ágiles que los de la práctica ortodoxa. En la medida en que se van confundiendo las esferas de actuación de los bancos comerciales y de inversiones, también estas modalidades operativas sufren cambios importantes, cuya creciente complejidad requiere cada vez más imaginación y creatividad. Así, en las cartas de instituciones financiadoras del desarrollo, como el Banco Mundial y el BID, evolucionan las operaciones de cofinanciamiento, incluyendo la asociación de créditos a la exportación con el financiamiento de proyectos específicos. En la actual coyuntura, la provisión de semejantes créditos, por parte de los países europeos, entre otros, refleja una auténtica convergencia de intereses, por cuanto, sin los créditos, América Latina se ve obligada a reducir drásticamente sus importaciones de origen europeo, a un punto tal que, por una parte, se agravan la recesión y el desempleo en Europa y, en la región misma pelagra la formación del capital fijo, buena parte del cual se constituye mediante importaciones desde los países de la OCDE.

Lo que se requiere en definitiva es una visión política con una perspectiva a largo plazo que, de uno y otro lado del Atlántico, permita la adopción de estrategias y políticas para solucionar los problemas del endeudamiento sin desmedro del desarrollo económico-social, y sobre todo sin echar a perder todas las conquistas logradas por América Latina en los últimos dos decenios de crecimiento mediante su propio esfuerzo, y financiadas en una proporción avasalladora gracias al ahorro interno. América Latina

6. Por ejemplo, *Towards a new Bretton Woods* (Report by a Commonwealth Study Group), Londres, Commonwealth Secretariat, 1983, 147 páginas.

no puede, evidentemente, hipotecar su extraordinaria dotación de recursos naturales para amortizar su deuda. Lo que puede, y desea, es obtener los medios, incluso de inversión directa, para explotar estos recursos y así obtener las divisas que le permitan a un tiempo rescatar sus obligaciones externas y seguir creciendo económicamente, absorbiendo la presión demográfica que de otra manera se haría explosiva e intolerable.

La banca internacional de desarrollo, incluso instituciones como el BID, tiene por vocación el otorgamiento de créditos a largo plazo para financiar proyectos de desarrollo, ya sea en el ámbito económico o en el social. La crisis actual ocasionó la flexibilización de las condiciones de préstamo y la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiamiento. La participación europea en ese proceso, así como en el suministro de cooperación técnica que entrañen tecnologías compatibles con la realidad latinoamericana, puede llegar a constituir una contribución sumamente importante para el éxito de tales programas, siempre y cuando, en aras de la coherencia, vaya acompañada de medidas de política igualmente amplias en el ámbito comercial.

Recuérdese que 14 países europeos son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (con 4.95% de su capital), junto con 25 latinoamericanos y del Caribe (además de Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón). Por ello, el Banco puede ser uno de los mecanismos internacionales más adecuados, sin perjuicio de otros, para facilitar una contribución financiera y técnica de Europa a América Latina, más importante de lo que ha sido en el pasado reciente. Al ingresar en el Banco como miembros de pleno derecho en 1976 y 1977, los países extrarregionales expresaron por ese solo hecho su compromiso con el desarrollo de América Latina. Y si es cierto que motivaciones estrictamente mercantiles han influido quizá en decisiones de política exterior y de política de asistencia al desarrollo, el hecho es que la gran mayoría de los gobiernos de Europa Occidental<sup>7</sup> han manifestado en forma inequívoca su intención de contribuir financieramente al desarrollo de América Latina por intermedio del BID.

Casi la totalidad de los mismos gobiernos reiteró esta intención recientemente<sup>8</sup> al constituirse una entidad subsidiaria del Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones, cuyo capital inicial de 200 millones de dólares, —mayoritariamente latinoamericano— como el del mismo Banco, cuenta con importantes aportes europeos. La experiencia europea en materia de pequeñas y medianas empresas, objeto de la participación en su capital accionario por parte de la nueva Corporación que actúa en América Latina, podrá ser muy beneficiosa para ese género de operaciones.

Son éstas, por tanto, las direcciones en las cuales Europa podría ser de gran ayuda a América Latina en la actual época de crisis. Los países europeos adoptaron recientemente medidas destinadas a apoyar a América Latina al ratificar la Sexta Reconstitución de los recursos del BID, para contribuir de esa manera a elevar el nivel acumulativo de los recursos de capital de la institución para alcanzar casi 43 000 millones de dólares. Semejante expansión ha permitido al Banco proseguir financiando un volumen creciente de préstamos, que actualmente ascienden a más de 3 000

millones de dólares por año, para proyectos de desarrollo económico y social en la región. Asimismo, permitió al BID ajustar sus operaciones con el propósito de incrementar al máximo posible los beneficios resultantes de estos préstamos, como son las condiciones de desembolso en las actuales circunstancias. Estas medidas, en su conjunto, no constituyen sin embargo sino un modesto primer paso y se necesitan ajustes de mayor envergadura, para lo cual podría ser decisiva la participación europea.

Existe una tendencia hacia el uso de torniquetes, de medidas de emergencia como paliativos heroicos para situaciones críticas. Empero, ya no es posible ignorar la necesidad de las reformas estructurales, especialmente si se tiene en cuenta la vitalidad básica de la economía latinoamericana en su conjunto, la cual en condiciones adecuadas habilita a la región a cumplir con todos sus compromisos internacionales —como además siempre lo ha hecho— al propio tiempo que sigue una política de desarrollo equilibrado. El BID es un instrumento de cooperación entre el Norte y el Sur en favor del desarrollo a largo plazo de América Latina, que reúne los recursos de los países de la OCDE con los de los que están al sur del río Bravo para promover este objetivo de crecimiento equilibrado que está en la raíz del proceso de desarrollo.

La capacidad del BID de alcanzar esta meta ha sido puesta a prueba durante sus casi 25 años de operaciones. En ese período, el Banco ha prestado cerca de 26 000 millones de dólares, los que a su vez propiciaron el financiamiento de proyectos con un costo global superior a 100 000 millones de dólares, destinados a la mejora de las condiciones de vida de toda América Latina. La institución se ha preocupado por movilizar recursos adicionales de fuentes externas; sin embargo, existe ahora la necesidad aún más grande de conocimientos y capacidades para optimizar la utilización de los recursos disponibles en el marco de operaciones financieras complejas pensadas para responder a los reclamos de un mercado dinámico. En esto, las naciones del Norte, y las de Europa en particular, pueden y deben desempeñar un papel de relieve.

Uno de los problemas del diálogo económico euro-latinoamericano en el ámbito multilateral consiste en la carencia de interlocutores institucionalizados. Del lado latinoamericano, como sabemos, la representación institucional es fragmentaria, puesto que la OEA contiene a Estados Unidos, la CEPAL se inserta en el sistema de las Naciones Unidas, los mecanismos de integración económica son de vocación esencialmente subregional, y si bien el SELA, a través de su Consejo Latinoamericano, tiene un mandato regional, de hecho la reducida dimensión de esa entidad, así como ciertas ramificaciones políticas, tienden a dificultar su papel protagónico en ese diálogo. El BID es una institución estrictamente técnica, financiadora del desarrollo latinoamericano, y no puede por tanto prestarse a un ejercicio esencialmente político.

Del lado europeo existe una pléthora de organismos más o menos actuantes, desde la vieja Unión de Europa Occidental hasta la Comunidad Europea, pasando por el Consejo de Europa (que actúa sobre todo en el plano moral, de tutela de los derechos humanos), la OTAN y la OCDE (que ambas contienen a importantes potencias extrarregionales), la Asociación Europea de Libre Comercio, el Consejo Nórdico, el Instituto Italo-Latinoamericano y, por supuesto, el CAME, etc. Ocurre que ninguno de estos organismos es genuinamente representativo de Europa en su conjunto, y si bien el Consejo de Europa lo es para Europa Occidental, hay un problema de competencias.

7. Las excepciones son Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega.

8. Acta Final de Roma, firmada el 4 de noviembre de 1983. Cf. doc. BID CA-236-1, del 14 de marzo de 1984.

La Comisión de las Comunidades Europeas sí las tiene en gran número de materias —pero no en todas— para los diez países (pronto serán doce) que la integran. Sin embargo, no sólo se resiente de limitaciones ideológicas, sino que también concede a América Latina un nivel relativamente bajo de prioridades en sus relaciones externas, en las cuales da preferencia a los dos países candidatos a ingresar en la CEE, Portugal y España; en seguida prefiere a los 64 países, sobre todo africanos, y también del Caribe y de la región del Pacífico, ex-colonias europeas en su mayoría, que se le asociaron en virtud de la segunda Convención de Lomé;<sup>9</sup> luego a los países de la orilla del Mediterráneo, y finalmente, en función de intereses estrictamente mercantiles, a los del Pacífico Occidental y del Sureste Asiático. Nótese que Europa pasa actualmente por una fase de encanto por el Pacífico, cuyo auge de crecimiento es comparable con el que tuvo América Latina hace dos decenios, olvidándose los europeos más bien calificados que en la orilla del mismo Pacífico se hallan nada menos que once países latinoamericanos que podrían ser socios comerciales y financieros bastante mejores que varios de los agrupados en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Dentro de Europa, la CEE ocupa un papel preponderante en las relaciones con América Latina, no sólo por su peso específico en el escenario económico, sino también en función de su actuación política, por ejemplo al canalizar su asistencia con exclusividad hacia los países latinoamericanos con regímenes democráticos representativos (cosa que no ocurre en sus relaciones con los países de Lomé o de la ASEAN). Si nos ceñimos a la esfera económica, vemos que América Latina representaba, en 1982, 4.60% de las exportaciones de la CEE y 5.70% de sus importaciones.

Los países latinoamericanos han tenido que afrontar muchas dificultades en sus relaciones con la Comunidad Europea. En lo institucional, el "diálogo" de Bruselas a nivel de los embajadores acreditados ante la CEE (GRULA) realmente nunca dio, a lo largo de más de diez años de existencia, los frutos que hubiera sido posible esperar. El SELA ha tratado de intervenir en este asunto,<sup>10</sup> pero se resiente de cierta debilidad institucional, por una parte y, por otra, a nivel político, de la presencia de Cuba, que no reconoce a la CEE ni es reconocida por ésta, lo cual ocasionó la suspensión del diálogo formal que venía teniendo lugar en Bruselas. A raíz del incidente se replanteó un diálogo renovado, pero la verdad es que ni en su anterior versión ni en la actual este mecanismo de comunicación puede resolver los problemas fundamentales, los que dependen de la voluntad política de estados soberanos,<sup>11</sup> incluso en cuestiones en las cuales la competencia exclusiva de la Comisión es muy limitada.

La representación diplomática de la Comisión en América Latina sigue limitada a una Delegación en Caracas con una suboficina en Santiago. En materia de política comercial, el único instrumento de la CEE que ofrece preferencias a los países en desarrollo en general es el esquema comunitario de preferencias generalizadas, ahora en su segunda etapa de aplicación (expira

en 1985), y que contiene severas restricciones a las exportaciones latinoamericanas de productos manufacturados.

La CEE mantiene actualmente acuerdos comerciales con tres países latinoamericanos: Uruguay (desde 1973), Brasil (1974 y 1980) y México (1975); de 1971 a 1980 estuvo en vigor un convenio con Argentina que se prevé renovar sobre bases más amplias; además, a fines de 1983 se celebró un acuerdo de cooperación entre la CEE y el Grupo Andino. Tampoco debe descartarse la posibilidad a corto plazo de celebrar un convenio, semejante a éste, con los países del istmo centroamericano. Por lo que respecta a la política comunitaria de asistencia para el desarrollo, objeto del "Memorandum Pisaní",<sup>12</sup> América Latina sólo ha podido beneficiarse marginalmente de sus recursos (excepto los países del Caribe anglófono, incluidos entre los asociados a la Comunidad de Lomé), puesto que nunca han excedido de 20% del presupuesto total de ayuda, siendo de notarse, sin embargo, una asistencia especial de 30 millones de UCE (unidad de cuenta europea) aprobada por el Consejo de Ministros a fines de 1982 para ciertos países de Centroamérica y el Caribe.

El año pasado, la Comisión Europea propuso al Consejo de Ministros unas "Pautas para reforzar las relaciones entre la Comunidad y América Latina",<sup>13</sup> en las cuales se plantea estrechar dichas relaciones en tres planos —el nacional, el subregional y el regional— y se señalan orientaciones en materia de política comercial (sin concesiones arancelarias), de desarrollo (restringiendo la ayuda a los países no asociados del área a los actuales beneficiarios en Centroamérica y el Caribe), de cooperación científica y energética, y de política financiera. En este último aspecto, se propone el financiamiento de proyectos específicos por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI); sin embargo, la competencia de los países ibéricos y los de Lomé por los recursos potencialmente disponibles hace muy poco factible esta recomendación.

Más allá del aspecto geopolítico, es manifiesta la importancia geoeconómica de América Latina para Europa como proveedora de materias primas. Es verdad que la política de desarrollo de la Comunidad Europea, reflejada en las sucesivas convenciones de Lomé, se destina de cierta manera a preservar el acceso de los países industrializados de la CEE a los recursos naturales de los asociados a ella, mayormente en África, en una relación en que algunos vislumbran síntomas neo-coloniales. No obstante la CEE ha estado atenta a la necesidad de diversificar sus fuentes de suministro ante la inestabilidad política de sus tradicionales proveedores africanos.

Esta política se manifestó en el Informe Davignon (inspirado por el Comisionado belga para los asuntos industriales de la Comunidad, visconde Etienne Davignon), formulado por la Comisión Europea en 1983. En este documento se aprecia un recrudecimiento del interés comunitario por las inversiones en el sector minero de América Latina, que desde el inicio de la crisis se venía descapitalizando, con un incremento correlativo de la inversión europea en el mismo sector en los países de la ASEAN, que la CEE ve como su gran mercado emergente, pese a la competencia de Japón. Este hecho explica en parte, además de otros factores netamente políticos, el interés de la Comunidad en firmar el Acuerdo de Cooperación con el Grupo Andino, suscrito a fines de 1983.

9. Con el ingreso de Mozambique, al firmarse la Tercera Convención de Lomé, el 8 de diciembre de 1984, son ya 65 los países de ese grupo. N. de la R.

10. Decisión núm. 150 del Consejo Latinoamericano del SELA, "Relaciones entre América Latina y la CEE", de septiembre de 1983.

11. V. SELA, SP/VIII o di/núm. 8, "Informe de evaluación de las relaciones entre las Comunidades Europeas y la América Latina".

12. Doc. COM (82) 640, del 30 de septiembre de 1982.

13. Doc. COM (84) 105, del 6 de abril de 1984.



Se ha hablado mucho de la crisis institucional de las Comunidades Europeas. Es cierto que hasta la reunión del Consejo Europeo celebrada en Fontainebleau el 28 y el 29 de junio de 1984 —la última bajo la presidencia francesa—, la Europa de los Diez estaba al borde del colapso, por la demora y las dificultades en avanzar en ciertos rubros esenciales, tales como la contribución británica al presupuesto comunitario, los problemas con la reformulación de la política agrícola común, las empantanadas negociaciones para el ingreso de España y Portugal, entre otros. Sin embargo, gracias sobre todo al liderazgo del presidente Mitterrand, que se empeñó personalmente en superar estos obstáculos, y gracias también a los esfuerzos de su gobierno, todo lo cual augura una fecunda gestión del ex-ministro francés de Finanzas, Jacques Delors, en la presidencia de la Comisión, a partir de fines de 1984, pudieron rodearse o superarse los óbices perentorios al proceso de integración europea. Puede afirmarse, entonces, que en el curso de dicho año hubo indicios, como las elecciones al Parlamento Europeo por sufragio directo del 14 y 17 de junio, y el proyectado tratado instituyendo la Unión Europea,<sup>14</sup> de una revitalización del esquema institucional comunitario.

La Comunidad Europea se ha quejado mucho, a lo largo de los años, y quizá no sin razón, del exceso de retórica en los planteamientos latinoamericanos y de la falta de una posición unívoca en ellos. Cabe notar, sin embargo, que la misma Comunidad adolece de síntomas semejantes. Cuando los planteamientos de la Comisión, como las propuestas del 6 de abril de 1984, se hacen sin que haya un respaldo presupuestario real, y por tanto, sin que la Comisión pueda actuar en forma eficaz y dinámica en sus relaciones con América Latina, en caso de ser aprobadas las propuestas por el Consejo de Ministros, lo que queda es poco más que retórica. Es de temerse que ese sea otra vez el caso. El rubro bajo el cual la Comisión pudiera haber actuado con competencia privativa es el de la política comercial, pero dada la oposición de los países de Lomé, así como la de los candidatos al ingreso (España y Portugal), al amparo de otros acápite como el del BEI, las propuestas quedan sujetas a excesivas restricciones, o se vuelven inoperantes.

Lo anterior suscita dos conclusiones importantes: a) la dicotomía entre los 65 países asociados a la Comunidad por la Convención de Lomé y los de América Latina tiende a acentuarse, solapando aún más la ya precaria solidaridad entre la región y el Tercer Mundo, y b) si bien a la larga la admisión de los dos países ibéricos a la Comunidad ampliada, prevista en principio para el inicio de 1986, puede entrañar algunos beneficios, aún imponderables, para América Latina, en el futuro a corto y mediano plazos las consecuencias de la incorporación de España y Portugal a la Europa de los Doce son más bien adversas, sobre todo en los campos comercial y financiero. Además, para ciertos países específicos, los efectos serán agudamente negativos en lo que atañe a su comercio exterior.

#### CONCLUSIONES

Jamás en la historia de la humanidad el concepto de interdependencia tuvo un papel tan importante como hoy. No caben economías autárquicas ni hermetismos políticos. América Latina no

ha sabido actuar en los foros internacionales en forma unívoca, como lo hacen otras regiones en vías de desarrollo, pese a sus controversias y polarizaciones internas. Es en buena medida como resultado de esa expresión cacofónica que la región no logra obtener la satisfacción de sus aspiraciones más legítimas por parte de interlocutores externos, incluyendo los europeos. Con honrosas excepciones, América Latina no sabe aún negociar en forma multisectorial y se ciñe muchas veces a entendimientos sector por sector, dejando de percibir la sinergia del complejo de relaciones económicas que afectan a las naciones. Hay que aprender a desenmascarar mitos, a ser pragmáticos en lugar de retóricos, a manejar grupos de presión además de los mecanismos pre-establecidos, a conciliar la diplomacia multilateral con la bilateral, a emplear instrumentos heterodoxos de persuasión. América Latina debe darse cuenta de la fuerza relativa de sus elementos de negociación y consolidar su identidad latinoamericana, a veces tan fragmentada. América Latina tiene, en último análisis, muchísimo que aprender para hacerse más respetada en los foros europeos.

Por otra parte, la región debería adquirir conciencia de que la solución de sus actuales dificultades puede mejorarse considerablemente mediante la colaboración de los países europeos. Las consecuencias de la recesión, así como las de la restructuración y del costo de la deuda externa latinoamericana son de una magnitud y una profundidad tales que su superación demandará la posición concertada tanto de los países de la región como de los industrializados, miembros de la OCDE.

Hemos identificado un gran número de líneas de acción convergentes por parte de los países latinoamericanos, por un lado, y de los europeos, por otro, con insistencia especial en la CEE y sus países miembros. Tales líneas podrían contribuir en forma muy significativa a la superación a mediano plazo de la actual crisis económica de América Latina. Evidentemente, las relaciones económicas internacionales no tienen lugar en el vacío, sino en un contexto. Los países de Europa Occidental se insertan en el de la OCDE, y en éste Estados Unidos tiene un papel preponderante, e igual ocurre, aunque en menor escala, con Japón. Las reuniones económicas cimeras en los Siete —es decir, los Seis y la CEE— constituyen un foro apropiado para deliberaciones sobre la gran estrategia geoeconómica del Occidente, en el marco del cual América Latina se incluye, pese a recientes disensiones aisladas.

Por último, convendría aceptar dos premisas: a) una estrategia de ayuda a largo plazo a América Latina se apoya fundamentalmente en una voluntad política de proceder así, no tanto por razones humanitarias —como ocurre con el rescate del Sahel— sino por motivaciones de egocentrismo nacional esclarecido, idénticas a las que presidieron la implantación del Plan Marshall; b) dicha ayuda debe entenderse como el conjunto de medidas bilaterales y multilaterales que permitan a la región liberarse del círculo de hierro de su crisis financiera, con reflejos en otros dominios. De aceptarse tales premisas, se sigue que los países de América Latina, que en Cartagena supieron coordinarse en forma tan constructiva, deberían unir esfuerzos para actuar de manera unívoca, mancomunada, en todas las capitales y en todos los foros pertinentes, para propiciar que se forme, en el más alto nivel, la conciencia de la inexorabilidad de semejante acción de parte de las naciones europeas y de la OCDE. En caso de que no se logren ni la acción unificada ni la conciencia mencionada, América Latina y Europa deberán estar listas para aceptar las consecuencias políticas y sociales previsibles. □

14. *Journal Officiel des Communautés Européennes* (JO), núm. C 77, del 19 de marzo de 1984, p. 25.